



**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 998/2003.
QUEJOSA: ASERRADERO TABLA LARGA,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE.**

**MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIO: ENRIQUE LUIS BARRAZA URIBE.**

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciocho de febrero de dos mil cuatro.

**VISTOS; y
RESULTANDO:**

PRIMERO. Por escrito presentado el seis de enero de dos mil tres, ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en Guadalajara, Jalisco, Aurora Contreras Sánchez, en representación de **ASERRADERO TABLA LARGA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se precisa:

**"III.- La autoridad responsable: - - - La Segunda
"Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal
"de Justicia Fiscal y Administrativa. - - - IV.- Acto
"reclamado: - - - La sentencia emitida por la**

***"Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de
octubre de 2002, en el juicio de nulidad
identificado con el número de expediente 2837/00-
04-02-7." (fojas 4 y 5 del juicio de amparo directo).***

SEGUNDO. La parte quejosa señaló como terceros perjudicados al Administrador Local Jurídico de Ciudad Guzmán del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en Ciudad Guzmán, Jalisco, al Presidente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, ambos situados en México, Distrito Federal.

TERCERO. En el escrito de demanda se señalaron como preceptos constitucionales violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se expusieron los antecedentes y los conceptos de violación que se estimaron pertinentes, mismos que a continuación se resumen, en la inteligencia de que solo se precisarán los que versan sobre el problema de constitucionalidad específico.

En el primero de ellos, aduce que la sentencia reclamada es violatoria de los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, debido a que consideró la autoridad de manera incorrecta que la madera aserrada, convertida a tablas o



tablones, principal actividad que realiza la empresa quejosa, surge de un proceso de industrialización, y en consecuencia, su enajenación se encuentra gravada a la tasa del 15% para efectos del impuesto al valor agregado.

Que no es completamente aplicable la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de este Alto Tribunal en que se apoyó la autoridad, derivada de la contradicción de tesis número 23/2002-SS, con rubro: **"VALOR AGREGADO. LA ENAJENACIÓN DE MADERA CORTADA EN TABLAS Y TABLONES, POR SER ESTOS PRODUCTOS RESULTADO DE UN PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN AL QUE ES SOMETIDO EL TRONCO DEL ÁRBOL DEBE GRAVARSE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA TASA DEL 15% O BIEN CON LA DEL 10%, PARA ENAJENACIONES EN LA REGIÓN FRONTERIZA, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1º, 2º Y 2ª-A, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO ARTÍCULO 3º DE SU REGLAMENTO."**, debido a que del citado artículo 2ª-A, fracción I, inciso a), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, deriva que la enajenación de animales y vegetales no industrializados se encuentra gravada bajo tasa 0% para efectos del pago del impuesto relativo, lo que se corrobora del contenido del artículo 3º del Reglamento de esa legislación tributaria, en cuanto previene que *"se considera que no se industrializan los animales y vegetales por el simple hecho de que se presenten cortados, aplanados, en trozos, etc..."*, de ahí que de la debida interpretación de los dos preceptos que se citan, lleva a la

consideración de que la madera cortada en tablas y tablones, actividad que realiza la quejosa como ya se indicó, no deriva de ningún proceso de industrialización, y en consecuencia, se gravará a la tasa 0%. Por tanto, añade, el precepto 2º-A, fracción I, inciso a), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, viola el principio de equidad tributaria, al tratar desigual a contribuyentes que se encuentran en igualdad de circunstancias, ello en virtud de que si un contribuyente enajena la madera en rollo, es decir, en pedazo del tronco del árbol, sin realizar ningún corte en él, dicha enajenación se encontrará gravada a la tasa del 0%, mientras que las operaciones realizadas por la quejosa, en las que enajena ese mismo pedazo de madera o tronco, únicamente cortado en tablas, indebidamente se le aplica la tasa del 15%, ocasionándose un trato inequitativo respecto de operaciones con objetos iguales.

Insiste en que aquella jurisprudencia no es aplicable de manera completa al caso, toda vez que la propia Segunda Sala incurre en el error de diferenciar la madera en rollo y la madera en tablas o tablones, lo que implica una violación a aquellas garantías, puesto que no existe diferencia alguna entre ambos objetos o bienes, toda vez que éstos son madera, ambos son productos que comparten la misma naturaleza, ya que el corte en tronco o en tabla no implica una transformación en cosa distinta a lo que son. Que lo anterior se corrobora con la siguiente tesis: **"VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 2º-A, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE GRAVA CON TASA DEL 0% LA ENAJENACIÓN DE EMPACADORAS DE FORRAJE, PERO NO LAS BOBINAS DE**



REEMBRO RECOCIDO, PARTES NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, PORQUE TRATÁNDOSE DE LAS PARTES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS SÍ ESTABLECE DICHA TASA".

Que también tiene aplicación sobre el tema la tesis con rubro: **"IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL"**.

En el segundo concepto de violación, señala que el precepto en cuestión, es violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que contemplan los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que su texto da lugar a diversas interpretaciones, mismas que resultan incluso contradictorias unas de otras, lo que jurídicamente resulta inaceptable; ello porque el artículo 2º-A fracción I, inciso a), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no es claro, preciso ni conciso, al no señalar qué tipo de enajenaciones de animales o vegetales no industrializados se encuentran gravados a la tasa del 0%.

Que sobre tal cuestionamiento, tiene aplicación la siguiente tesis emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a saber: **"IMPORTACIONES DE ÁRBOLES DE NAVIDAD NO CAUSAN EL 15% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO"**; así como la sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con rubro: **"VALOR AGREGADO.**

VEGETALES NO INDUSTRIALIZADOS (ENAJENACIÓN DE TABLAS Y TABLONES, ASÍ COMO SUS RESIDUOS), ESTÁN AFECTOS A LA TASA DEL 0%, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2°-A, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 3° DE SU REGLAMENTO".

Finalmente, reitera en este apartado, que la jurisprudencia que surgió al resolver la contradicción de tesis 23/2002-SS, antes referida, sólo resolvió el aspecto de legalidad, empero, de la lectura de la ejecutoria relativa, deriva que existe un matiz de inconstitucionalidad en el precepto precisado, puesto que en ella se advirtió incertidumbre en su texto, ya que se indicó que el contribuyente desconoce a ciencia cierta si el simple hecho de cortar la madera implica un proceso de industrialización.

CUARTO. Por acuerdo de veinticinco de abril de dos mil tres, el Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, admitió la demanda y la registró bajo el número A.D.137/2003, y el día veintiocho de mayo del propio año, dictó sentencia que concluyó con el siguiente punto resolutivo:

"ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni "protege a la negociación denominada 'Aserradero 'Tabla Larga', Sociedad Anónima de Capital "Variable, en contra de la autoridad y por el acto



**"señalados en el resultando primero de esta
"ejecutoria." (foja 213 ídem).**

Las consideraciones en las que se apoya la sentencia en la parte que interesa, se resumen de la siguiente manera:

Que es incorrecto el alegato de la quejosa en el sentido de que el precepto impugnado es inconstitucional, porque aun admitiendo que éste presentara problemas de interpretación o confusión en la redacción, ello no implica contravención a la Carta Magna, pues ese vicio no puede depender de los aciertos o deficiencias gramaticales del legislador, sino de la contravención objetiva a un precepto constitucional, a más de que existen diversos métodos de interpretación de leyes a que puede recurrirse para conocer su correcto significado, lo que impide el estado de incertidumbre jurídica que se invoca, mientras que la interpretación del precepto, aun contradictorio, no es problema del precepto, sino de la autoridad que realizó la tarea propia. En apoyo de lo anterior, el Tribunal citó la siguiente tesis: **"LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN Y PRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDE INCURRIR".**

Por otro lado, señaló dicho Tribunal Colegiado que, adverso a la inconformidad de la quejosa, el artículo 2º-A, fracción I, inciso a), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no es contrario al principio de equidad tributaria, debido a que de lo expuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al

resolver la contradicción de tesis número 23/2002-SS (antes referida), se observa que determinó que la madera en rollo, es decir, los troncos de árboles derribados o seccionados, con un diámetro mayor a diez centímetros en cualquiera de sus extremos, sin incluir la corteza y sin importar la longitud, conserva su propia naturaleza, es decir, sigue siendo tronco, por lo que no está sometido a proceso de industrialización, y en consecuencia, a su venta se aplica la tasa del 0% a que se refiere el citado precepto legal, y que en cambio, la madera cortada en tablas y tablones, se está sometiendo a un proceso de industrialización o transformación, porque los troncos se están convirtiendo en algo distinto.

Así que, añadió la autoridad de amparo, no existe inequidad como se alega, puesto que no se advierte discriminación alguna ni distinción injustificada, ya que el objeto que motiva la aplicación de las tasas 0% y 15% es real y objetiva, en cuanto al proceso de industrialización que se emplea en el corte de tablas y tablones, respecto del simple corte de troncos de árboles, de ahí la diferencia de la tasa impositiva de su venta, y por ende, no se violenta el artículo 31, fracción IV, constitucional.

QUINTO. Inconforme con la sentencia anterior, Oscar Álvarez del Toro, abogado autorizado de Aserradero Tabla Larga, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuso recurso de revisión, el cual fue presentado ante la Oficialía Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 998/2003.

Se recibió el diecisiete de junio de dos mil tres, mismo que se registró en el Tribunal del conocimiento al día siguiente.

Dicho Tribunal, por auto de dieciocho de junio de dos mil tres, ordenó enviar los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEXTO. Recibidos los autos en este Alto Tribunal de la Federación, por acuerdo de su Presidente de primero de julio de dos mil tres, ordenó formar y registrar el presente tomo de revisión, correspondiéndole el número 998/2003.

En el propio proveído, se ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento.

SÉPTIMO. Posteriormente, en proveído de seis de agosto de dos mil tres, el Presidente de este Máximo Tribunal Federal, ordenó pasar los autos, para su estudio, al señor Ministro Humberto Román Palacios.

OCTAVO. Mediante proveído de veintiuno de enero de dos mil cuatro, previo dictamen del Ministro Ponente, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó enviar el asunto a esta Primera Sala, cuyo Presidente, por auto dictado el veintiséis del mismo mes y año, lo radicó y ordenó la devolución de los autos al Ministro Ponente.



CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, y 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General número 5/2001, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve del propio mes y año, en virtud de haberse interpuesto en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo, en el que se pronunció sobre el planteamiento de inconstitucionalidad vertido por el quejoso, respecto del cual existe precedente temático que hace innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. El presente recurso de revisión contra la sentencia de amparo directo fue interpuesto dentro de los diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo;

Esto es así, toda vez que la sentencia recurrida fue notificada a la parte quejosa, ahora recurrente, mediante lista publicada el tres de junio de dos mil tres (foja 213 del expediente de amparo), la cual surtió efectos al día siguiente, es decir, el cuatro del mes citado, mientras que el recurso de que se trata se



presentó ante el Tribunal Colegiado del conocimiento el dieciocho del propio mes y año; por tanto, como el cómputo legal a que se refiere aquella disposición legal, corrió del cinco de junio de dos mil tres y feneció el dieciocho del mismo mes y año, excluyendo del cómputo los días siete, ocho, catorce y quince de ese mes y año, por ser inhábiles, es evidente que el medio de impugnación de que se trata se interpuso dentro del plazo señalado.

TERCERO. La parte quejosa formula los agravios que a continuación se sintetizan:

En el Primero: Que son insuficientes los argumentos del Tribunal a quo para estimar dentro de la constitucionalidad el precepto legal impugnado, dado que la jurisprudencia en que se basa sólo contiene el criterio de cómo debe interpretarse legalmente aquél, mientras que en la demanda se reclamó su inconstitucionalidad, de ahí que era inaplicable a este caso, ya que no resuelve el problema planteado.

Que el propio Tribunal reconoce que la única diferencia apreciable respecto de la madera en rollo y la madera en tabla o tablones, es la forma exterior de cada una de ellas, y esta no es una circunstancia suficiente para que exista una distinción respecto del trato tributario que se debe dar a cada una de estas presentaciones de la misma madera; de ahí que el tratamiento inequitativo que prevé el artículo 2º-A, fracción I, inciso a), de la Ley del Impuesto, no encuentra justificación cuando distingue entre contribuyentes que enajenan madera cortada en rollo o

cortada en tablas o tablones, gravando al primero de ellos a una tasa del 0%, mientras que al otro, a la misma enajenación de madera, le es aplicable la tasa del 15%, lo que constituye infracción al artículo 31, fracción IV, constitucional.

Que al respecto, son aplicables las siguientes tesis: **"IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO."**; **"IMPUESTOS. LAS REGLAS SOBRE SU NO CAUSACIÓN ESTÁN SUJETAS A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE GENERALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS."**; **"EQUIDAD TRIBUTARIA. LA TRANSGRECIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO REQUIERE COMO PRESUPUESTO QUE SE ESTABLEZCAN DIVERSAS CATEGORÍAS DE CONTRIBUYENTES."**; **"IMPUESTOS, VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE."**; **"EQUIDAD Y GENERALIDAD EN MATERIA JURÍDICO-FISCAL."**, y **"EQUIDAD Y GENERALIDAD DE UNA LEY. DIFERENCIAS."**

Que de acuerdo con la doctrina, el principio de igualdad equivale a una prohibición de discriminaciones arbitrarias, entendiendo por tales las no razonables o contrarias a la conciencia jurídica o a la naturaleza de la cosa. También se considera que la igualdad supone el trato equitativo ante la ley fiscal, de manera que el reparto de la carga tributaria se haga por igual entre todos los contribuyentes, lo que no significa una igualdad aritmética, sino el tratamiento igual para los iguales y desigual para los desiguales, y que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegios, lo que se corrobora de la siguiente tesis:



IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL".

Que la distinción que hace el precepto legal impugnado es caprichosa e infundada y, por ende, violatoria de aquella disposición constitucional.

Que no se debe pasar por alto que en la jurisprudencia y ejecutoria relativa que emitió la Segunda Sala, y en la que indebidamente se apoya el Tribunal Colegiado, se advirtieron fuertes indicios de que el precepto impugnado contiene vicios de inconstitucionalidad evidente.

Cita la tesis siguiente: **VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 2º-A, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE GRAVA CON TASA DEL 0% LA ENAJENACIÓN DE ENRACADORAS DE FORRAJE, PERO NO LAS BOBINAS DE ALAMBRE RECOCIDO, PARTES NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, PORQUE TRATÁNDOSE DE LAS PARTES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS SÍ ESTABLECE DICHA TASA".**

En el segundo: Que el precepto legal impugnado es contrario a los principio de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, puesto que la doctrina informa que en tratándose de impuestos, el sujeto

pasivo del tributo, en todo momento, debe conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, mientras que la arbitrariedad está proscrita.

Al efecto, cita las tesis siguientes: **"MULTAS. LOS PRECEPTOS QUE LAS ESTABLECEN ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, DENTRO DE UN CONTEXTO NORMATIVO QUE NO PREVÉ LOS ELEMENTOS QUE DEBE VALORAR LA AUTORIDAD PARA FIJAR EL MONTO POR EL QUE SE IMPONDRÁN, NO TRANSGREDEN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA."**; **"OBLIGACIONES FISCALES. EL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL."**; **"CONTRIBUCIONES OMITIDAS. EL TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, AL ESTABLECER QUE AQUÉLLAS SE PODRÁN VOLVER A DETERMINAR CUANDO SE COMPRUEBEN HECHOS DIFERENTES, ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL"**.

Que de tales criterios, se corrobora que el artículo 2º-A, fracción I, inciso a), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, contraviene aquellas garantías constitucionales, puesto que su



La acción sume al contribuyente en incertidumbre al no saber a ciencia cierta si el simple hecho de cortar la madera implica un proceso de industrialización.

Que es incorrecta la consideración del Tribunal, en cuanto asevera que la inconstitucionalidad de un precepto no pueda provenir de su interpretación, toda vez que el hecho de que el legislador haya formulado un artículo cuya redacción se preste a diversos alcances, necesariamente implica que respecto de los sujetos privados que encuadran en la hipótesis normativa prevista en el precepto, exista incertidumbre respecto de estos alcances y contenido del propio numeral, situación que es a la que se refieren los diversos precedentes mencionados, de ahí que sea inaplicable la tesis que sobre este aspecto citó el Tribunal, cuenta habida que su mandante nunca exigió ni planteó deficiencias en la redacción del precepto, sino que indicó que tal numeral es inconstitucional, porque permite diversas interpretaciones, tan es así que órganos colegiados emitieron interpretaciones contradictorias.

CORTE DE
LA NUEVA LEY
3 ACUERDOS DE

Por todo ello, estima que la norma cuestionada infringe aquellas garantías individuales, y cita, finalmente, las tesis siguientes: **"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DENTRO DE LAS CUESTIONES PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES QUE SON MATERIA DE ESA INSTANCIA SE ENCUENTRA LA RELATIVA A LA INTERPRETACIÓN DE LO DISPUESTO EN LA LEY CONTROVERTIDA, CON INDEPENDENCIA DE QUE YA LA HAYA REALIZADO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE**

CIRCUITO EN LA SENTENCIA RECURRIDA O AL RESOLVER PREVIAMENTE UN RECURSO DE REVISIÓN FISCAL.”; “PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS IMPUESTOS.”; “IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN.”, y “AGUAS NACIONALES. EL ARTÍCULO 227, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA AL REMITIR A UNA LEY LOCAL PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CUOTA POR USO O APROVECHAMIENTO”.

CUARTO. Son infundados los agravios que expone el recurrente.

En efecto, por razón de técnica, procede resolver acerca del segundo de los agravios, cuyas manifestaciones que antes se sintetizaron resultan inexactas, por lo siguiente:

De ninguna manera el Tribunal Colegiado confundió la inconformidad del impetrante de garantías, al exponer en el concepto de violación relativo, la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, basada en que la forma en que fue redactado el precepto legal por el legislador, es motivo de interpretaciones variadas que a la postre derivan en un problema de constitucionalidad.

La problemática en cuestión, la hizo depender en que la disposición reclamada no es clara, precisa ni concisa (fojas 25 y



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 998/2003.

del expediente de amparo), al no señalar, agregó en su libelo de garantías, qué tipo de enajenaciones de animales o vegetales no industrializados se encuentran gravados a la tasa del 0%.

El artículo 2°-A, fracción I, inciso a), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, tildado de inconstitucional, aplicable en la época de la emisión del acto reclamado (octubre de 2002), dice:

"Art. 2°-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos y actividades siguientes:

"La enajenación de:

"a) Animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule".

Como deriva de la inconformidad expuesta contra tal precepto, la inconstitucionalidad de éste no surge ni por cuanto hace a algún problema en su redacción (por no ser claro, preciso o conciso, como se alega), ni en cuanto a la interpretación que pudiera acontecer de la supuesta confusión del mismo, como erróneamente se sostiene, debido a que tal como determinó el Tribunal Colegiado de Circuito, en atención a la inconformidad expuesta, la probable deficiencia, respecto del primer punto, no precisa aquel problema, sino tan solo reviste aspectos netamente de mera legalidad.

Cierto, en múltiples casos esta Primera Sala, siguiendo el criterio del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, ha establecido que no puede considerarse inconstitucional el precepto legal de una norma secundaria, por impreciso y por no definir algunos términos empleados en el texto mismo de la norma; pues si bien, esos términos pudieran ser motivo de interpretación, ello, en última instancia viene a ser un problema de legalidad y no de constitucionalidad.

Así es, de una lectura integral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ninguno de los artículos que la componen se desprende que sea un requisito para el legislador ordinario establecer en cada uno de los ordenamientos secundarios un catálogo que defina los vocablos o locuciones utilizados, puesto que las leyes no son diccionarios y el sentido que se atribuya a cada una de las palabras empleadas será motivo de interpretación por los diferentes sistemas existentes.

Asimismo, se ha venido señalando reiteradamente, que lo deseable es que las leyes, incluso la propia Constitución General de la República, con el propósito de evitar conflictos de interpretación, orienten sobre el significado de las expresiones que componen su articulado; es una aspiración exigible en los foros profesionales y académicos, más desafortunadamente al no ser un imperativo constitucional, es incorrecto afirmar que cualquier norma se aparta del texto de la Ley Suprema al incurrir en una deficiencia de definición o irregularidad en su redacción.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 998/2003.



En virtud de que la contravención a ésta se basa en aspectos objetivos que generalmente son los principios consagrados en ella, ya sea prohibiendo una determinada acción de la autoridad en contra de los particulares gobernados u ordenando la forma en que deben conducirse en su función de gobierno.

Así pues, la claridad de las leyes constituye uno de los imperativos apremiantes y necesarios para evitar o disminuir su obscuridad, ambigüedad, confusión y contradicción, tan es así que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la interpretación legislativa y judicial de las normas, pero no condiciona en ningún precepto la constitucionalidad de éstas al hecho de que describan detalladamente el significado adecuado de los vocablos utilizados en su redacción, en razón de que la exigencia de tal requisito tornaría imposible la función legislativa en vista de que, por razones de simple lógica, la redacción de las leyes se traduciría en una labor interminable y nada práctica, provocando que no se cumpliera, de la manera oportuna que se requiere, con la finalidad principal que busca tal función el Estado, que es la de regular y en consecuencia armonizar las relaciones humanas.

CORTE DE
LA NACION
ACUERDOS DE
LA SALA

Por otro lado, como se ha señalado en el párrafo precedente, en razón del reconocimiento de la necesidad e imperativo de que las leyes expedidas por el legislador ordinario sean claras buscando su sencilla interpretación y aplicación, y a la vez reconociendo los vicios en la redacción y precisión de términos en que éstas pueden incurrir, la propia Carta Magna, si

bien no exige el requisito de que las disposiciones legales definan el total de los términos que utilizan, **reconoce la interpretación judicial y legislativa de las normas**, siendo la primera la que se realiza cotidianamente por los órganos competentes de este Poder Judicial de la Federación; así en el párrafo séptimo de su artículo 94 señala lo siguiente:

"Artículo 94. Se deposita el ejercicio ...

"(...)

**"La Ley fijará los términos en que sea obligatoria
"la jurisprudencia que establezcan los tribunales
"del Poder Judicial de la Federación sobre
"interpretación de la Constitución, leyes y
"reglamentos federales o locales y tratados
"internacionales celebrados por el Estado
"Mexicano, así como los requisitos para su
"interrupción y modificación.**

"(...)".

Por su parte, el inciso f) de su artículo 72, prevé:

**"Artículo 72. Todo proyecto de ley o de decreto,
"cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las
"Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas,
"observándose el reglamento de debates sobre la**



**"forma, intervalos y modo de proceder en las
"discusiones y votaciones:**

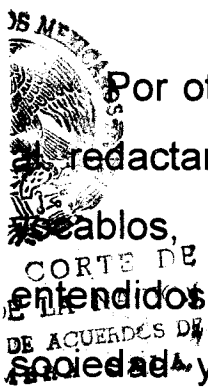
"(...)

**"f) En la interpretación, reforma o derogación de
"las leyes se observarán los trámites establecidos
"para su formación.**

"(...)".

Así las cosas, tales dispositivos evidencian la aceptación tácita por parte de nuestro sistema jurídico de la necesidad de que existan métodos que, con motivo de las imprecisiones y obscuridad que puedan afectar a las disposiciones legales, establezcan su sentido y alcances, pero nunca condiciona su validez al hecho de que sean claras en su redacción y en los términos que emplean.

Por otra parte, conviene recordar que el legislador ordinario al redactar las disposiciones jurídicas, utiliza varios tipos de vocablos, entre ellos los conocidos como de uso común, entendidos como aquellos utilizados cotidianamente en la sociedad y cuyo significado se sobreentiende, igualmente se emplean palabras cuya utilización se contrae a un determinado sector de la población, por el grado de especificidad o tecnicismo que encierran, pero también es común que se utilice algún vocablo de uso común otorgándole un significado diverso o más amplio al que ordinariamente se le da, e incluso modificando éste,



en estos casos es el mismo legislador quien precisa en las propias disposiciones que integran la ley el alcance del término, por lo que, de no existir tal precisión, debe entenderse que el vocablo empleado se utiliza según su acepción común y así debe interpretarse.

Sobre el tema, son de citarse los rubros y datos de identificación de las tesis aplicables al caso:

**"LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO
"DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN Y
"PRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL
"LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR."**

(Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XII, Agosto de 2000. Tesis: P. CIV/2000. Página: 145).

**"LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE
"DERIVAR DE LA FALTA DE DEFINICIÓN DE LOS
"VOCABLOS O LOCUCIONES AHÍ UTILIZADOS, EN
"QUE EL LEGISLADOR PUEDA INCURRIR."**

(Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVI, Diciembre de 2002. Tesis: 1a. LXXXVII/2002. Página: 229).

Precisamente, en uso de la facultad de los órganos federales encargados de administrar justicia, que deriva de los



preceptos constitucionales antes citados, la interpretación del fundamento impugnado ha quedado completamente definida por la Segunda Sala de esta Suprema Corte al fallar la contradicción de tesis número 23/2002-SS, cuya jurisprudencia a continuación se transcribe, con lo cual el aspecto que alega el recurrente, relativo a que la confusión del texto de dicho dispositivo legal cuestionado provoca variadas interpretaciones y que por ello es inconstitucional, es completamente infundado.

La jurisprudencia de referencia, contiene los siguientes datos:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su

"Gaceta

"Tomo: XVI, Julio de 2002

"Tesis: 2a./J. 59/2002

"Página: 359



CORTE
LA NACION
ACUERDOS DE
SALA.

"VALOR AGREGADO. LA ENAJENACIÓN DE

"MADERA CORTADA EN TABLAS Y TABLONES,

"POR SER ESTOS PRODUCTOS RESULTADO DE

"UN PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN AL QUE

"ES SOMETIDO EL TRONCO DEL ÁRBOL, DEBE

"GRAVARSE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA

"TASA DEL 15%, O BIEN CON LA DEL 10%, PARA

"ENAJENACIONES EN LA REGIÓN FRONTERIZA,

"DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS
"ARTÍCULOS 1º, 2º Y 2º-A, FRACCIÓN I, INCISO
"A), DE LA LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO
"RELATIVO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO
"ARTÍCULO 3º DE SU REGLAMENTO. Si bien es
"cierto que los artículos 2º-A, fracción I, inciso a),
"de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 3º de
"su reglamento, al establecer, el primero de ellos,
"que se gravará con la tasa del 0% la enajenación
"de animales y vegetales que no estén
"industrializados, salvo el hule y, el segundo, que
"para efectos de lo dispuesto en aquel numeral se
"considera que no están industrializados los
"animales y vegetales por el simple hecho de que
"se presenten cortados, aplanados, en trozos,
"frescos, salados, secos, refrigerados, congelados
"o empacados, ni los vegetales por el hecho de ser
"sometidos a procesos de secado, limpiado,
"descascarado, despepitado o desgranado, deben
"aplicarse de manera estricta, según lo previsto en
"el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación,
"toda vez que se encuentran relacionados con los
"elementos del impuesto, a saber, el objeto y la
"tasa, también lo es que la Suprema Corte de
"Justicia de la Nación ha estimado que ello no
"impide al intérprete acudir a los diversos métodos
"que permiten conocer la verdadera intención del
"creador de las normas, cuando de su análisis



"literal, en virtud de las palabras utilizadas, ya sea
"técnicas o de uso común, se genere incertidumbre
"sobre su significado. En esa tesitura, si por
"‘industrializado’ se entiende aquello que fue
"objeto de industria o elaboración, esto es, que fue
"transformado en otra cosa por medio de un
"trabajo adecuado, se llega a la conclusión de que
"cuando un tronco es cortado para crear tablas y
"tablones, se le está sometiendo a un proceso de
"industrialización o transformación, por el que se
"modifica su naturaleza, independientemente de
"que en ambos casos se trate de madera, pues se
"les da determinado corte, forma, longitud y grosor,
"por lo que cuando los contribuyentes del
"impuesto al valor agregado enajenen tales tablas o
"tablones, éstos deben calcular el impuesto al valor
"agregado conforme a la tasa general del 15%, o
"bien, a la del 10% aplicable cuando la enajenación
"se realice por residentes de la región fronteriza y
"su entrega material se lleve a cabo en dicha
"región, según lo establecido en los artículos 1° y
"2° respectivamente, de la referida ley.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CORTE SUPLENTE
DE LA NACION
DE ACUERDOS DE
TERCERA SALA

"Contradicción de tesis 23/2002-SS. Entre las
"sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en
"Materia Administrativa del Tercer Circuito y el
"Tercer Tribunal Colegiado en Materia
"Administrativa del mismo circuito. 7 de junio de

**"2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: José
"Vicente Aguinaco Alemán y Mariano Azuela
"Güitrón. Integró Sala el Ministro Juventino V.
"Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón;
"en su ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz
"Romero. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre.**

**"Tesis de jurisprudencia 59/2002. Aprobada por la
"Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión
"privada del catorce de junio de dos mil dos".**

Si bien es cierto que este criterio no resuelve el problema de constitucionalidad que aquí se plantea, dilucida en cambio el alcance legal del precepto a estudio, en el sentido de que la madera cortada en rollo, es decir, los troncos de árboles derribados o seccionados, con un diámetro mayor a diez centímetros en cualquiera de sus extremos, sin incluir la corteza y sin importar la longitud, conserva su propia naturaleza, es decir, sigue siendo tronco, por lo que no está sometido a proceso de industrialización y, en consecuencia, a su venta se aplica la tasa del 0% a que se refiere el citado precepto legal, y que en cambio, la madera cortada en tablas y tablones, se está sometiendo a un proceso de industrialización o transformación, porque los troncos se están convirtiendo en algo distinto, por lo que para tal caso, aplica las tasas del 10% ó 15%, según sea el caso, de acuerdo con los artículos 1° y 2° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, aplicables al caso concreto, por ello no tiene aplicación la tesis que refiere la parte recurrente respecto de un caso análogo.



Al efecto, conviene agregar que no es verídico que la Segunda Sala de este Alto Tribunal, al emitir dicha jurisprudencia, reconociera en la ejecutoria relativa que el precepto en cuestión es inconstitucional, por el hecho de que señalara ***"que su aplicación de manera estricta genera incertidumbre sobre su significado"*** (como así lo subraya el recurrente en el agravio primero). Admitió, en cambio, que para dilucidar la contradicción de tesis denunciada, era conveniente acudir al método de interpretación de las normas y así establecer el alcance justo del precepto, conforme al criterio de la propia Sala, en el sentido de que las normas tributarias, por más que el Código Fiscal de la Federación exija que su aplicación es estricta, deben analizarse bajo la figura de la interpretación, pero se insiste, en ningún momento estableció aquella problemática, como se pasa a demostrar con la transcripción conducente:

"CUARTO. Determinando que sí existe la contradicción de criterios sobre la cuestión jurídica especificada, debe establecerse cuál es la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."



CORTE DE
LA NACIÓN
ACUERDO DE
LA SALA

"Para tal efecto, se estima necesario precisar, en primer lugar, si cortar la madera en tablas, tablones o rollos implica que ésta se hubiera sometido o no a un proceso de industrialización o transformación, pues dependiendo de ello los contribuyentes se encuentran obligados a calcular

**"el impuesto al valor agregado que se hubiere
"generado con motivo de dicho acto o actividad, ya
"sea mediante la aplicación de la tasa general del
"15% o la del 10% (aplicable cuando la enajenación
"se realice por residentes de la región fronteriza y
"su entrega material se lleve a cabo en la citada
"región), o bien, a través de la aplicación de la tasa
"del 0% a los valores que refiere la propia Ley del
"Impuesto al Valor Agregado.**

**"Lo anterior es así en virtud de que el artículo 2°-A,
"fracción I, inciso a), de la Ley del Impuesto al Valor
"Agregado, expresamente establece que el
"gravamen de referencia se calculará aplicando la
"tasa del 0% a los valores que refiere dicho
"ordenamiento jurídico cuando se enajenen
"animales y vegetales que no estén
"industrializados, a excepción del hule.**

**"Dicho numeral, en la parte que interesa,
"textualmente establece:**

**"Artículo 2°-A. El impuesto se calculará aplicando
"la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta
"ley, cuando se realicen los actos o actividades
"siguientes:**

"I. La enajenación de:



**"a) Animales y vegetales que no estén
"industrializados, salvo el hule'.**

**"De dicho precepto jurídico se desprende que la
"enajenación de animales y vegetales que no estén
"industrializados se gravará, en todos los casos, a
"la tasa del 0%, mientras que la enajenación de
"esos mismos bienes, pero que sí estén
"industrializados, causará el impuesto al valor
"agregado a la tasa general del 15%, o bien, a la del
"10%, cuando la enajenación se realice por
"residentes de la región fronteriza y en ella se dé la
"entrega material del bien de que se trate, en
"términos de lo dispuesto por los artículos 1° y 2°
"de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que, en
"la parte que interesa, establecen textualmente:**



**CORTE DE
E LA NACIÓN
DE ACUERDOS DE
CERRA SALA,**

**"Artículo 1° Están obligadas al pago del impuesto
"al valor agregado establecido en esta ley, las
"personas físicas y las morales que, en territorio
"nacional, realicen los actos o actividades
"siguientes:**

"I. Enajenen bienes.

"...

**"El impuesto se calculará aplicando a los valores
"que señala esta ley, la tasa del 15%. El impuesto al
"valor agregado en ningún caso se considerará que
"forma parte de dichos valores'.**

**"Artículo 2° El impuesto se calculará aplicando la
"tasa del 10% a los valores que señala esta ley,
"cuando los actos o actividades por los que se
"deba pagar el impuesto, se realicen por residentes
"en la región fronteriza, y siempre que la entrega
"material de los bienes o la prestación de servicios
"se lleve a cabo en la citada región fronteriza.**

**"Tratándose de importación, se aplicará la tasa del
"10% siempre que los bienes y servicios sean
"enajenados o prestados en la mencionada región
"fronteriza'.**

**"En ese sentido, cabe señalar que el presidente de
"la República al expedir el Reglamento de la Ley del
"Impuesto al Valor Agregado, en uso de la facultad
"reglamentaria que establece la fracción I del
"artículo 89 de la Constitución Política de los
"Estados Unidos Mexicanos, precisó los supuestos
"en los cuales no se deben considerar como
"industrializados los animales y vegetales que sean
"objeto de enajenación, para efectos del cálculo del
"impuesto al valor agregado, al señalar:**



**"Artículo 3° Para los efectos de la fracción I inciso
"a) del artículo 2°-A de la ley, se considera que no
"se industrializan los animales y vegetales por el
"simple hecho de que se presenten cortados,
"aplanados, en trozos, frescos, salados, secos,
"refrigerados, congelados o empacados, ni los
"vegetales por el hecho de ser sometidos a
"procesos de secado, limpiado, descascarado,
"despepitado o desgranado'.**

**"Por tanto, para los efectos de la fracción I, inciso
"a), del artículo 2°-A de la Ley del Impuesto al Valor
"Agregado se considera que no se industrializan
"los animales y vegetales por el simple hecho de
"que se presenten cortados, aplanados, en trozos,
"frescos, salados, secos, refrigerados, congelados
"o empacados, ni los vegetales por el hecho de ser
"sometidos a procesos de secado, limpiado,
"descascarado, despepitado o desgranado.**



CORTE DE
E LA M
DE ACUERDO S DE
TERA

**"Una vez precisado lo anterior, se debe señalar que
"de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°
"del Código Fiscal de la Federación, en la materia
"fiscal, las disposiciones que establezcan cargas a
"los particulares y las que señalan excepciones a
"las mismas, así como las que fijan las infracciones
"y sanciones, son de aplicación estricta,**

**"considerándose que establecen cargas a los
"particulares las normas que se refieren al sujeto,
"objeto, base, tasa o tarifa, pudiendo interpretarse
"las demás disposiciones tributarias con cualquier
"método de interpretación jurídica.**

"Dicho precepto jurídico textualmente establece:

**"'Artículo 5° Las disposiciones fiscales que
"establezcan cargas a los particulares y las que
"señalan excepciones a las mismas, así como las
"que fijan las infracciones y sanciones, son de
"aplicación estricta. Se considera que establecen
"cargas a los particulares las normas que se
"refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.**

**"Las otras disposiciones fiscales se interpretarán
"aplicando cualquier método de interpretación
"jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se
"aplicarán supletoriamente las disposiciones del
"derecho federal común cuando su aplicación no
"sea contraria a la naturaleza propia del derecho
"fiscal'.**



**"De lo anterior se desprende que en términos de lo
"dispuesto por el numeral transcrito, lo establecido
"por el artículo 3° del Reglamento de la Ley del
"Impuesto al Valor Agregado, en cuanto señala los**



"supuestos respecto a los cuales no se debe
"considerar que los animales y vegetales se hayan
"sometido a un proceso de industrialización para
"efectos del cálculo del impuesto al valor agregado,
"en términos de lo dispuesto por el artículo 2º-A,
"fracción I, inciso a), se debe aplicar de manera
"estricta, toda vez que tiene relación directa con
"algunos de los elementos del impuesto, a saber, el
"objeto y la tasa.

"No obstante ello, esta Segunda Sala de la
"Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
"considerado que si bien es cierto que las
"disposiciones que establezcan cargas a los
"particulares y las que señalen excepciones a las
"mismas, así como las que fijan las infracciones y
"sanciones, son de aplicación estricta, ello no
"impide al intérprete acudir a los diversos métodos
"que permiten conocer la verdadera intención del
"creador de las normas, cuando de su análisis
"literal en virtud de las palabras utilizadas, sean
"técnicas o de uso común, se genere incertidumbre
"sobre su significado, ya que el efecto de la
"disposición en comento es constreñir a aquél a
"realizar la aplicación de la respectiva hipótesis
"jurídica única y exclusivamente a las situaciones
"de hecho que coincidan con lo previsto en ella,
"una vez desentrañado su alcance.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CORTES DE
DE LA NACIÓN
DE ACUERDO CON
TERA SALA.

**"Corroborar lo anterior la tesis 2a. CXLII/99,
"sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema
"Corte de Justicia de la Nación en la Novena Época
"que aparece publicada en el Semanario Judicial de
"la Federación y su Gaceta, Tomo X, diciembre de
"1999, página 406, que es del tenor literal siguiente:**

**"LEYES TRIBUTARIAS. SU INTERPRETACIÓN AL
"TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5º
"DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
"Conforme a lo establecido en el citado numeral,
"para desentrañar el alcance de lo dispuesto en las
"normas que establecen el sujeto, objeto, base,
"tasa o tarifa de una contribución y las excepciones
"a ésta, las respectivas disposiciones deben
"aplicarse en forma estricta, mientras que la
"interpretación del resto de las disposiciones
"tributarias podrá realizarse aplicando cualquier
"otro método de interpretación jurídica. Ante tal
"disposición, la Suprema Corte de Justicia
"considera que la circunstancia de que sean de
"aplicación estricta determinadas disposiciones de
"carácter tributario, no impide al intérprete acudir
"los diversos métodos que permiten conocer la
"verdadera intención del creador de las normas,
"cuando de su análisis literal en virtud de las
"palabras utilizadas, sean técnicas o de uso**



"común, se genere incertidumbre sobre su
"significado, ya que el efecto de la disposición en
"comento es constreñir a aquél a realizar la
"aplicación de la respectiva hipótesis jurídica única
"y exclusivamente a las situaciones de hecho que
"coincidan con lo previsto en ella, una vez
"desentrañado su alcance'.

"Por tal motivo, a fin de estar en posibilidad de
"desentrañar la verdadera intención del legislador
"al establecer que para efectos del cálculo del
"impuesto al valor agregado se aplicará la tasa del
"0% cuando se enajenen animales y vegetales que
"no estén industrializados, con excepción del hule,
"se estima necesario definir el concepto
"industrializado' a que hace mención el propio
"artículo 2°-A, fracción I, inciso a), de la Ley del
"Impuesto al Valor Agregado, toda vez que su
"aplicación de manera estricta genera
"incertidumbre sobre su significado.



COR
E LA L
DE ACUER
1ERA SALA.

"El Diccionario de la Real Academia de la Lengua
"Española define al concepto industrializar de la
"siguiente manera:

"Hacer que una cosa sea objeto de industria o
"elaboración'.

*"Ahora bien, en virtud de que dicha definición no
"es suficiente para poder establecer con claridad el
"significado de la palabra 'industrializado', se hace
"necesario definir algunos de los conceptos
"citados en dicha definición, atendiendo para ello a
"lo establecido por el propio Diccionario de la Real
"Academia de la Lengua Española que, en su parte
"conducente, precisa:*

*"'Industria. ... Conjunto de operaciones materiales
"ejecutadas para la obtención, transformación o
"transporte de uno o varios productos naturales.
"...'.*

*"'Elaborar. Preparar un producto por medio de un
"trabajo adecuado'.*

"'Elaboración. Acción y efecto de elaborar'.

*"Finalmente, se estima necesario definir los
"conceptos transformar y transformación, los
"cuales han sido definidos por la Real Academia de
"la Lengua Española de la siguiente manera:*

*"'Transformar. Hacer cambiar de forma. Convertir
"una cosa en otra. Hacer mudar de conducta'.*



**"Transformación. Acción y efecto de transformar o
"transformarse'.**

**"De lo anterior se desprende que por
"industrializado' se debe entender aquello que fue
"objeto de industria o elaboración, esto es, que fue
"transformado en otra cosa por medio de un
"trabajo adecuado.**

**"Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto
"que la intención del legislador de señalar que
"únicamente se gravará a la tasa del 0% la
"enajenación de animales y vegetales que no estén
"industrializados, radica en que al momento de
"realizar esas enajenaciones es necesario que los
"productos conserven su propia naturaleza, esto
"es, que no sean transformados en una cosa
"distinta.**

**"El razonamiento anterior se ve robustecido por el
"hecho de que el presidente de la República al
"expedir el Reglamento de la Ley del Impuesto al
"Valor Agregado, en su artículo 3°, estableció que
"se considera que no se industrializan los animales
"y vegetales por el simple hecho de que se
"presenten cortados, aplanados, en trozos, frescos,
"salados, secos, refrigerados, congelados o
"empacados, ni los vegetales por el hecho de ser**

COPIA DE
DE LA
DE ACUERDOS DE
MERA SRA.

**"sometidos a procesos de secado, limpiado,
"descascarado, despepitado o desgranado, toda
"vez que con ello no se les está transformando o
"convirtiendo en otra cosa de naturaleza distinta,
"sino que, por el contrario, siguen conservando su
"propia naturaleza.**

**"Ahora bien, por lo que se refiere al problema
"jurídico objeto de la presente denuncia de
"contradicción de criterios, se estima necesario
"precisar que la madera con la que se elaboran las
"tablas, tablones o rollos proviene de los troncos
"de los árboles.**

**"Cabe señalar que dichos troncos pueden ser
"cortados, trozados, secados, limpiados o
"descascarados sin que se considere que se están
"industrializando para efectos del cálculo del
"impuesto al valor agregado en términos de lo
"dispuesto por el artículo 2°-A, fracción I, inciso a),
"de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de
"conformidad con lo establecido por el artículo 3°
"de su reglamento, toda vez que no obstante que el
"tronco ha sido cortado, trozado, secado, limpiado
"o descascarado, sigue conservando su propia
"naturaleza, esto es, sigue siendo un tronco, tal
"como sucede con la madera en rollo que es
"definida por la fracción XI del artículo 2° del**



"Reglamento de la Ley Forestal, como troncos de
 "árboles derribados o seccionados, con un
 "diámetro mayor a diez centímetros en cualquiera
 "de sus extremos, sin incluir la corteza y sin
 "importar la longitud, lo que pone de manifiesto
 "que en este caso es aplicable la tasa del 0% a su
 "enajenación.

"A efecto de corroborar lo anterior, se estima
 "necesario transcribir lo dispuesto por la fracción
 "XI del artículo 2° del Reglamento de la Ley
 "Forestal, que establece:

"Artículo 2° Para los efectos de este reglamento,
 "además de las definiciones contenidas en la ley,
 "se entiende por:

"...

"XI. Madera en rollo: Troncos de árboles derribados
 "o seccionados, con un diámetro mayor a 10
 "centímetros en cualquiera de sus extremos, sin
 "incluir la corteza y sin importar la longitud'.

CORTES DE
 LA NACIÓN
 ACUERDOS DE
 ERA SA

"Sin embargo, cuando esos troncos son cortados
 "para elaborar tablas o tablones, se les está
 "sometiendo a un proceso de industrialización o
 "transformación, en virtud de que los troncos se

"están convirtiendo en algo distinto a éstos, sin
"que tenga trascendencia para resolver dicha
"cuestión que en ambos casos se trate de madera,
"pues un librero aunque se produce con madera ya
"es algo distinto de una simple tabla o tablón.

"A fin de corroborar lo anterior, se estima
"necesario definir dichos conceptos conforme al
"Diccionario de la Real Academia de la Lengua
"Española, que establece:

"'Tronco. Tallo fuerte y macizo de los árboles y
"arbustos'.

"'Tabla. Pieza de madera plana, de poco grueso y
"cuyas dos caras son paralelas entre sí'.

"'Tablón. Tabla gruesa'.

"Por tal motivo, al ser las tablas y tablones
"producto del proceso de industrialización de los
"troncos de los árboles no se ubican en el
"supuesto de excepción que establece el artículo
"3o. del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor
"Agregado, toda vez que se está modificando
"naturaleza de tronco, independientemente de que
"en uno y otro caso se trate de productos
"derivados de la madera, en virtud de que con



**"motivo de esa transformación, se le está
"otorgando a la madera determinado corte, forma,
"longitud y grosor, lo que le da un valor agregado,
"pues no es lo mismo un tronco cortado, limpiado
"o secado que las tablas que se originan de éste".**

Además, conforme a las reglas que derivan de lo dispuesto por los artículos 197 y 197-A de la Ley de Amparo, la figura procesal de la contradicción de tesis, no es apta para resolver acerca de la constitucionalidad de leyes, sino que solo analiza en principio la existencia de criterios divergentes por parte de dos o más órganos jurisdiccionales que sustenten al resolver asuntos de cualquier naturaleza que sean de su competencia, mas solo desde el ámbito de la legalidad, habida cuenta que para el estudio del aspecto que se comenta la ley prevé otros medios de control.

En apoyo de lo anterior se cita la tesis siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su

"Gaceta

"Tomo: IV, Agosto de 1996

"Tesis: P. XCV/96

"Página: 64



CORTE DE
LA NACION
E ACUERDOS DE
ERA SALA,

**"LEYES. INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS, NO SE
"ESTABLECE POR LA SUPREMA CORTE DE**

**"JUSTICIA DE LA NACIÓN AL RESOLVER UNA
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. La Segunda Sala de
"la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al
"resolver la contradicción de tesis 19/91, que se
"publicó en la página 15, Gaceta 60, del Semanario
"Judicial de la Federación, al examinar la aplicación
"del artículo 242 del Código Fiscal de la
"Federación, sostuvo que el recurso de
"reclamación sólo procede contra las resoluciones
"del Magistrado instructor que desecha una
"demanda de nulidad. Por tanto, si un Tribunal
"Colegiado sostiene que el recurso de reclamación
"también procede contra los acuerdos que la tienen
"por no presentada, no implica que exista desacato
"a la jurisprudencia surgida de la mencionada
"contradicción de tesis, siempre y cuando haya
"examinado planteamientos de
"inconstitucionalidad, pues, de no existir, los
"Tribunales Colegiados están obligados a acatar la
"jurisprudencia que resolvió exclusivamente sobre
"el alcance de la norma y no sobre la
"constitucionalidad de la ley.**

**"Amparo en revisión 1471/94. Establecimientos
"Emeur, S.A. de C.V. 27 de febrero de 1996.
"Unanimidad de once votos. Ponente: Juan N. Silva
"Meza. Secretario: Sergio E. Alvarado Puente.**



"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de julio en curso, aprobó, con el número XCV/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a once de julio de mil novecientos noventa y seis".

En otro orden de ideas, en relación con el primer agravio, como se adelantó, también resulta infundado.

En efecto, de manera acertada el Tribunal Colegiado determinó que el artículo 2º-A, fracción I, inciso a), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, aplicable al presente asunto, no viola el principio de equidad, y por tanto se ajusta al artículo 31, fracción IV, constitucional.

Ahora bien, el tema a dilucidar en el presente asunto estriba en si la diferencia en el trato entre agentes que enajenan con vegetales, concretamente aquellos que cortan la madera en rollo, respecto de los que comercializan esos troncos de árboles derribados o seccionados, procesándolos en tablas o tablones, justifica, para los primeros la tasa del 0% del impuesto relativo y para los segundos la tasa del 10% o del 15%, según sea el caso que la propia ley determina; o bien, ambos contribuyentes se encuentran en la misma hipótesis de causación del tributo, como alega el recurrente.

CORTE DE
LA NACIÓN
ACUERDOS DE
RA SALA

La fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice:

"Artículo 31.- Son obligaciones de los mexicanos:

"(...)

***"IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la
"Federación, como del Distrito Federal o del Estado
"y Municipio en que residan, de la manera
"proporcional y equitativa que dispongan las
"leyes".***

Tal como lo informa el recurrente, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el precepto transcrito, ha establecido tradicionalmente que el principio de equidad tributaria consiste en que los contribuyentes de un impuesto, que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, es decir, en términos del principio de mérito, las leyes deben tratar de igual manera a los iguales.

El criterio anterior deriva de la interpretación que se ha hecho de la Constitución Federal, plasmado en las siguientes jurisprudencias de este Alto Tribunal, que dicen:

***"EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. EI
"principio de equidad no implica la necesidad de***

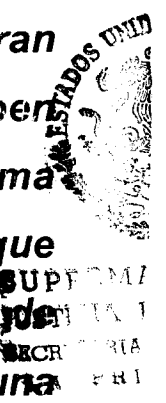


CORTE DE
LA MEXICO
ACUERDOS DE
ERA SALM

"que los sujetos se encuentren, en todo momento y
"ante cualquier circunstancia, en condiciones de
"absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del
"deber de los Poderes públicos de procurar la
"igualdad real, dicho principio se refiere a la
"igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los
"gobernados de recibir el mismo trato que quienes
"se ubican en similar situación de hecho porque la
"igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV,
"constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación
"de la ley. De lo anterior derivan los siguientes
"elementos objetivos, que permiten delimitar al
"principio de equidad tributaria: a) no toda
"desigualdad de trato por la ley supone una
"violación al artículo 31, fracción IV, de la
"Constitución Política de los Estados Unidos
"Mexicanos, sino que dicha violación se configura
"únicamente si aquella desigualdad produce
"distinción entre situaciones tributarias que
"pueden considerarse iguales sin que exista para
"ello una justificación objetiva y razonable; b) a
"iguales supuestos de hecho deben corresponder
"idénticas consecuencias jurídicas; c) no se
"prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de
"trato, sino sólo en los casos en que resulta
"artificial o injustificada la distinción; y d) para
"que la diferenciación tributaria resulte acorde con
"las garantías de igualdad, las consecuencias

*"jurídicas que resultan de la ley, deben ser
"adecuadas y proporcionadas, para conseguir el
"trato equitativo, de manera que la relación entre la
"medida adoptada, el resultado que produce y el fin
"pretendido por el legislador, superen un juicio de
"equilibrio en sede constitucional."* (Novena Época,
Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo: V, Junio de 1997, Tesis:
P./J. 41/97, página: 43).

**"IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD
"TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31,
"FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una
"revisión a las diversas tesis sustentadas por esta
"Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno
"al principio de equidad tributaria previsto por el
"artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal,
"necesariamente se llega a la conclusión de que, en
"esencia, este principio exige que los
"contribuyentes de un impuesto que se encuentran
"en una misma hipótesis de causación, deben
"guardar una idéntica situación frente a la norma
"jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que
"las disposiciones tributarias deben tratar
"manera igual a quienes se encuentren en una
"misma situación y de manera desigual a los
"sujetos del gravamen que se ubiquen en una
"situación diversa, implicando, además, que para**





**"poder cumplir con este principio el legislador no
 "sólo está facultado, sino que tiene obligación de
 "crear categorías o clasificaciones de
 "contribuyentes, a condición de que éstas no sean
 "caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar
 "a determinadas clases o universalidades de
 "causantes, esto es, que se sustenten en bases
 "objetivas que justifiquen el tratamiento diferente
 "entre una y otra categoría, y que pueden
 "responder a finalidades económicas o sociales,
 "razones de política fiscal o incluso extrafiscales."**

(Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XI, Marzo de 2000, Tesis: P./J. 24/2000, página: 35).

De tales jurisprudencias, como bien lo estima el inconforme, se desprende que la garantía de equidad exige que las leyes tributarias deben tratar igualmente a los iguales, en similares circunstancias, lo que se corrobora con lo establecido por la Carta Magna, pues consigna el principio de igualdad o equidad en la materia tributaria para que, con carácter general, los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares ubicados en una misma situación, deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor.



En este orden de ideas, el principio de equidad, referido a la constitucionalidad de las contribuciones, no implica necesariamente que todos los sujetos se encuentren siempre en

todo momento y ante cualquier circunstancia en condiciones absolutas de igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de todos los poderes públicos de procurarla, tal principio se refiere a la igualdad jurídica, esto es, a no soportar un perjuicio o una falta de beneficio desigual e injustificado en razón de los criterios jurídicos por los cuales se guía la actuación de los poderes públicos.

Luego, los distinguos arbitrarios o caprichosos por parte del legislador o de las autoridades, sin que exista una justificación objetiva y razonable, tratando de modo dispar lo que es jurídicamente igual, o igual lo que es diverso, deben considerarse contrarios al principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional.

Ahora bien, en su escrito de demanda administrativa, presentada el trece de enero de dos mil dos, ante la Segunda Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jalisco, Aurora Contreras Sánchez, en su calidad de representante legal de Aserradero Tabla Larga, sociedad anónima de capital variable, informó, entre otras cosas, que *"mi representada enajena, tanto al menudeo como al mayoreo, madera cuyo proceso consiste en cortar árboles en trozos, además de aserrarlos en tablas y tablones, sin que sufra ningún proceso de transformación industrial."* (foja 3 del expediente de origen).

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPLENTE
SECRETARÍA DE JUSTICIA
FOLIO 3
LA PAZ

A dicho escrito anexó el diverso de nueve de mayo de dos mil (documento base de la acción), por medio del cual, con tal carácter, solicitó a la Administración Local Jurídica de Ingresos de



ciudad Guzmán, Jalisco, consulta en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que: *“Conforme a lo establecido por el artículo 2°-A, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el artículo 3° del Reglamento de la misma ley, la enajenación de la madera talada y aserrada por mi mandante está afecta a la tasa del 0% de dicho tributo y no a la tasa general del 15%.”* (fojas 39 a 46 del juicio de origen).

Ya se estableció con antelación que el alcance legal del precepto 2°-A, fracción I, inciso a), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a estudio, vigente en la época de emisión del acto reclamado, acorde con la resolución de la contradicción de tesis antes transcrita, es en el sentido de que la madera cortada en rollo, es decir, los troncos de árboles derribados o seccionados, con un diámetro mayor a diez centímetros en cualquiera de sus extremos, sin incluir la corteza y sin importar la longitud, conserva su propia naturaleza, es decir, sigue siendo tronco, por lo que no está sometido a proceso de industrialización y, en consecuencia, por su venta se aplica la tasa del 0% a que se refiere aquella disposición, y que en cambio, la madera cortada en tablas y tablones, se está sometiendo a un proceso de industrialización o transformación, porque los troncos se están convirtiendo en algo distinto, por lo que para tal caso, aplica las tasas del 10% ó 15%, según sea el caso, de acuerdo con los artículos 1° y 2° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

CORTE DE LA
ACUERDOS DE
ER

Bajo esas directrices, la diferencia de trato entre los agentes pasivos del tributo, existe en tanto que quien enajena vegetales, y sólo corta la madera en trozos o en rollo, como no realiza ninguna actividad industrial, se encuentra sujeto a la tasa 0% del impuesto relativo, mientras que aquél que comercializa esos trozos, procesándolos en tablas o tablones, en vista de que lleva a cabo un acto de industria, tal como se menciona en la jurisprudencia relativa, su actividad queda bajo el tributo y, por ende, obligado al pago de la tasa del 10% o del 15%, según sea el caso que la propia ley determina.

Así las cosas, como bien lo resolvió el Tribunal Colegiado de Circuito, no existe violación al principio de equidad tributaria, que emana del artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, porque ese trato diferente entre ambos agentes del impuesto se justifica bajo aspectos reales y objetivos, en la medida en que la enajenación de vegetales, o sea, de madera específicamente, los sujetos la llevan a cabo bajo procesos distintos, uno, no industrial, porque sólo se limita al corte del árbol en troncos derribados o seccionados, es decir, madera en rollo; otro, lo transforma, realizando cortes hasta convertirlos en tabla o tablones, a través de un proceso de industrialización, cambiando su naturaleza vegetal, actividad ésta que es la que realiza la promovente del amparo, de ahí que, como son situaciones jurídicas discordantes, no puede existir igual tratamiento de la ley, por lo que el precepto legal cuestionado no es inconstitucional.

Por lo expuesto, y fundado, se resuelve:



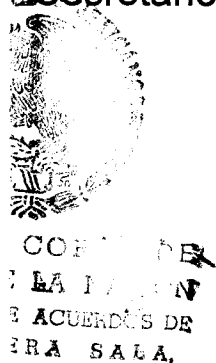
PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **ASERRADERO TABLA LARGA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, contra el acto y autoridad que quedaron precisados en el resultando primero, en términos de las consideraciones vertidas en este fallo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos respectivos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese este tomo como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Humberto Román Palacios (ponente), José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz y Presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

Firman la Ministra Presidenta y el Ministro Ponente con el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala, que autoriza y da fe.



PRESIDENTA

MINISTRA OLGA SÁNCHEZ CORDERO
DE GARCÍA VILLEGAS.

PONENTE



MINISTRO HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.

SECRETARIO DE ACUERDOS



MANUEL DE JESÚS SANTIZO RINCÓN.

Esta hoja forma parte del amparo directo en revisión 998/2003, promovido por Aserradero Tabla Larga, Sociedad Anónima de Capital Variable, fallado el dieciocho de febrero de dos mil cuatro, por unanimidad de cinco votos, en el sentido siguiente: **PRIMERO.** Se confirma la sentencia recurrida. **SEGUNDO.** La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **ASERRADERO TABLA LARGA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, contra el acto y autoridad que quedaron precisados en el resultando primero, en términos de las consideraciones vertidas en este fallo. Conste.



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO 998/2003

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

El Lic. Manuel de Jesús Santizo Rincón Secretario de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace constar que, en cumplimiento al artículo 191 de la Ley de Amparo, al concluir la sesión pública de este día se fijó en el lugar destinado para las notificaciones, una lista de los asuntos tratados en la audiencia de esta Sala celebrada el día de hoy, en la que se incluyó *Amparo Directo en Revisión 998/2003*

México, D.F., a 18 de Febrero de 2004,

4 MAR. 2004

Por lista de la misma fecha, se notificó la resolución anterior a los interesados. Conste.

Siendo las catorce horas de la fecha antes indicada y en virtud de no haber comparecido los interesados a recibir notificaciones se tiene por hecha dicha notificación por medio de lista. Doy fe.

SE HACE CONSTAR QUE ESTA HOJA CORRESPONDE AL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO 998/2003, PROMOVIDO POR ASERRADERO TABLA LARGA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Conste.

PJCC*pab



CORTE DE
LA NACION
ACUERDOS DE
LA SALA

SECRET



SECRET
NO FORN DISSEM